



## Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license: Advertencia.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es)

### Usted es libre de:

**Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

**Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material

La licencianta no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

### Bajo los siguientes términos:



**Atribución** — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licencianta.



**NoComercial** — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).

**No hay restricciones adicionales** — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

**La economía procesal de la utilidad, pertinencia y conducencia de los medios probatorios en los procesos declarativos Colombianos presentados en el año 2020<sup>1</sup>**

**The procedural economy of the usefulness, relevance, and conduct of the evidence in the Colombian declaratory processes presented in 2020**

*Cristian Javier Daza Vargas<sup>2</sup>*

*Universidad Católica de Colombia*

**Resumen**

El presente trabajo de investigación pretende efectuar un análisis del régimen probatorio en Colombia en los procesos declarativos. Lo que enmarca dentro de esta investigación es la importancia de la conducencia, pertinencia y utilidad de los medios probatorios en los procesos civiles regulados por la Ley 1564 de 2012, y si han ofrecido mejoras efectivas al momento de acceder a la administración de justicia y si dicho acceso contribuye a la economía procesal.

**Palabras Clave:** Conducencia, Pertinencia; Utilidad; Procesos civiles; Jurisdicción; Competencia; Medios probatorios, Colombia.

**Abstract**

This research work aims to carry out an analysis of the evidentiary regime in Colombia in declarative processes. What is framed within this investigation is the importance of the conduct, relevance and usefulness of the evidence in civil proceedings regulated by Law 1564 of 2012, and if they have offered effective improvements when accessing the administration of justice and if such access contributes to procedural economy.

**Key Words:** Conductivity, Relevance; Utility; Civil proceedings; Jurisdiction; Competition; Evidence, Colombia.

---

<sup>1</sup> Artículo de reflexión elaborado como trabajo de grado para optar por el título de abogado, bajo la Dirección del Dr. Eddy Rolando Ramírez. Docente de la facultad de derecho. Universidad Católica de Colombia. Sede Bogotá, 2021.

<sup>2</sup> Egresado no graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Identificado con código estudiantil N°2113524, Correo institucional: [cjdaza24@ucatolica.edu.co](mailto:cjdaza24@ucatolica.edu.co).

## Sumario

**Introducción.1. Configuración conceptual de los Procesos Declarativos en Colombia 2. Medios probatorios relevantes en los procesos declarativos 2.1. Prueba conducente en los procesos declarativos.2.1.1 Declaración de Parte.2.2. Prueba pertinente en los procesos declarativos. 2.2.1 Declaración de Pertenencia. 2.2.2 Resolución de Compraventa.2.3. Prueba útil en los procesos declarativos. 2.3.1 Utilidad en la Declaración de Pertenencia. 2.3.2 Utilidad en la Resolución de Compraventa.3. El camino hacia la economía procesal por medio de herramientas propias del Código General del Proceso. 4. Manejo de la Normatividad procesal en Colombia en la administración de justicia desde el Código General del Proceso. Conclusiones. Referencias.**

## Introducción

No han sido pocas las veces que se ha escuchado la frase “dame la prueba y te daré el derecho”, pues la prueba representa la esencia del éxito al momento de reclamar un derecho, o la protección de este por parte de la administración de justicia. Es poco probable, lograr la activación del aparato jurisdiccional del Estado buscando que sea reivindicado un derecho sin la presencia de al menos una prueba que permita producir en el juez el efecto de pleno convencimiento, y su decisión inclinada a favor de la petición.

El estudio y conocimiento de los medios probatorios adquiere, una relevancia conveniente, pues al gozar de la existencia de estos en la presentación de la demanda, se evidencian maximizadas las posibilidades de desvirtuar la teoría de la contraparte, y que puedan darse como ciertas las pretensiones de aquel que pretende un derecho. Ahora bien, lo que se conoce como régimen probatorio, es el resultado de la evolución y desarrollo de las pruebas judiciales a través del desarrollo jurisprudencial en Colombia. Lo cual permite una mejor comprensión de lo que actualmente reside en el contenido de los códigos procesales.

Es menester resaltar, que para cada tipo de proceso existe un medio de prueba idóneo y lo que concierne en específico a los procesos declarativos, conlleva necesariamente a que el conocimiento de los distintos medios probatorios sea completo, para así evitar invocar uno que no conduzca al convencimiento pleno del juez, o resulte viciado conforme a la norma que lo regule.

De esta manera, se propone hacer un serio pero muy concreto estudio del régimen probatorio, su corriente conceptual implementada en Colombia, los diversos medios de prueba aplicables a los

procesos declarativos, sus bondades al momento de requerirse en el proceso, y por supuesto su alcance y deficiencia al momento de buscar una economía procesal que garantice de forma concreta la materialización del cumplimiento de los derechos invocados.

Por las razones expuestas anteriormente, en el presente artículo de reflexión se ha planteado como pregunta de investigación la siguiente: ¿Dentro del marco jurídico colombiano, existe la posibilidad de determinar la relevancia o jerarquía en la aplicación de los medios probatorios de la pertinencia, utilidad y conducencia dentro de los procesos declarativos bajo los criterios de la economía procesal establecidos en ley 1564 de 2012? Dicha pregunta establece como objetivo evidenciar como la doctrina le ha dado manejo al concepto de economía procesal en Colombia.

De igual forma se le dará respuesta a la pregunta de investigación desde la construcción doctrinal del proceso declarativo para si abordar el tema del manejo de los medios probatorios de la utilidad, pertinencia y conducencia en dichos procesos hasta realizar un abordaje por el camino normativa de la economía procesal frente a estos procesos y como dicha implementación se ha manejado bajo los criterios de la ley 1564 de 2012 y así determinar si el manejo oportuno de la utilidad, pertinencia y conducencia de las pruebas aportadas en los procesos declarativos en Colombia conllevan a una sana y efectiva economía procesal.

La metodología utilizada en la elaboración del presente artículo, de acuerdo con Agudelo (2008) es mediante *la dogmática jurídica desde la perspectiva de la investigación dogmática*. “Esta investigación explota de manera amplia el aspecto normativo del derecho, su propósito es agrupar y unir de forma ordenada un conjunto de dispositivos legales sobre un referente común” (Sánchez, 2011, p.340) en tanto permite apartarse de una especulación y opinión subjetiva fuera de fundamentos formales que pueden llevar a una interpretación errónea de la ley.

## **1. Configuración conceptual de los Procesos Declarativos en Colombia**

Los procesos declarativos tienen por objeto “acertar los estados jurídicos, es decir, establecer la aplicación obligatoria de las normas; para ello sirve admirablemente ese interés público que es la certeza del derecho” (Carnelutti, 1944, p.89). Por lo que se infiere que en ellos se busca la declaración de un derecho o la existencia de una obligación por parte del demandado en favor del demandante. Es así como corre en marcha el aparato jurisdiccional del país.

Cabe resaltar que el Juez dirige dichos procesos<sup>3</sup>, pero es necesidad de los abogados litigantes dar celeridad a las actuaciones judiciales, con el fin de que el proceso sea más eficiente y de esta forma buscar por los medios más idóneos y pertinentes para que así el Juez llegue a la verdad.

Dentro del desarrollo del Código General del Proceso se consolidaron los procesos declarativos pertenecientes a las nuevas formas de ejercer el derecho por medio de la oralidad erradicando así los formalismos no necesarios del ejercicio litigioso. Dicha oralidad precisamente dividió en dos a los procesos declarativos los cuales son: proceso verbal y proceso verbal sumario consagrado a partir del artículo 368 al 389 y 390 al 398.<sup>4</sup>

En primer lugar, el proceso verbal que reemplazó al proceso ordinario del Código de Procedimiento Civil busca darle mayor agilidad a la resolución de los litigios, con audiencias donde la argumentación debe hacerse oralmente, con mayor presencia e inmediación del juez, tanto en la práctica de pruebas como en los alegatos de las partes. Funcionario que ahora debe proferir autos y sentencias de forma verbal, y cuando no logre realizarlo de esta forma, deberá justificarlo<sup>5</sup>.

El proceso verbal a su vez, se caracteriza por conocer de todas las controversias que no tengan señalado un trámite especial, y carezcan de un trámite propio y en aras del aspecto probatorio los procesos declarativos al igual que los demás exigen para su efectividad la presentación de medios probatorios que como se mencionó anteriormente lleven al juez al sano y perfecto convencimiento.

Igualmente, estos procesos pueden materializarse o surgen a la vida jurídica con la manifestación de las distintas situaciones que exigen el proceder de estos procesos para así lograr evidenciar y presentar los tres elementos de valoración probatoria corresponden a la temática de la demostración probatorio de los procesos declarativos.

---

<sup>3</sup> "LEY 1564 DE 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Artículo 42 numeral 1 sobre *LOS DEBERES DEL JUEZ*: 1. *Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal.*"

<sup>4</sup> *Ibíd*em, Artículo 368 al 390 LIBRO TERCERO, Procesos Declarativos, TÍTULO I. PROCESO VERBAL. Artículo 390 al 398 TÍTULO II. PROCESO VERBAL SUMARIO.

<sup>5</sup> "LEY 1564 DE 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Artículo 373 sobre *LA AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO* numeral 5: *Si no fuere posible dictar la sentencia en forma oral, el juez deberá dejar constancia expresa de las razones concretas e informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En este evento, el juez deberá anunciar el sentido de su fallo, con una breve exposición de sus fundamentos, y emitir la decisión escrita dentro de los diez (10) días siguientes, sin que, en ningún caso, pueda desconocer el plazo de duración del proceso previsto en el artículo 121*".

Respecto al novedoso Proceso Verbal en el Código General del Proceso Garzón (2017) afirma:

Se concibe como la cuerda procesal general de la cual se nutren y se desprenden los demás procesos del Código. Se establece que la mayoría de los actos procesales se desarrollarán por el juez de manera oral en audiencia, y que la sentencia se deberá proferir de manera oral en ella, salvo en casos excepcionales en los cuales el fallo podrá proferirse por escrito. (p.152)

De esta forma, los procesos declarativos desde la perspectiva del proceso verbal pretenden una celeridad procesal en tanto brindan la posibilidad en la oralidad para que sea esta la forma por la cual se materialicen los derechos. “Será un proceso célere, donde opere la concentración de actuaciones procesales, donde todos los actos, solicitudes y peticiones de las partes y cuestiones jurídicas se resuelvan de manera oral con la presencia del juez” (Garzon,2017, p.184).

Uno de los fines más importantes del Código General del Proceso bajo la luz de los procesos declarativos es lograr la funcionalidad que requiere. Dicha funcionalidad puede lograrse teniendo como base y criterio fundamental implementar las audiencias con un sistema oral, lo cual implica la aplicación de algunos principios generales del derecho probatorio como el de celeridad<sup>6</sup> e inmediación<sup>7</sup> por parte del Juez, para que de esa manera un proceso sea resuelto en el menor tiempo posible.

En pocas palabras los procesos declarativos desde su connotación general son la base de la economía procesal en tanto su aplicación formal no es convencional. Este tipo de procesos ya sea verbal o verbal sumario brinda al aparato jurisdiccional descongestión en los trámites siempre y cuando la aplicación oportuna de los medios probatorios se aplique de forma correcta lo cual se detallará a continuación.

---

<sup>6</sup> *CELERIDAD*: “confiere a esta palabra el significado de Velocidad. Prontitud, rapidez. El vocablo se valora como cualidad siempre que configure diligente actividad. De tal forma que se entiende por celeridad la agilidad, la prontitud en la realización de todo acto o actividad” (Guerrero, 2016).

<sup>7</sup> *INMEDIACIÓN*: “pertenece a la categoría de principios atinentes a la forma de los actos procesales o principios de procedimiento, particularmente vinculado a los principios de oralidad y concentración, siendo asimismo apreciable un intento generalizado entre la literatura especializada de ampliar su alcance más allá del momento procesal en que tradicionalmente se viene imponiendo su preceptiva vigencia, esto es, en la fase probatoria” (Cabezudo, 2009).

## 2. Medios probatorios relevantes en los Procesos Declarativos

Los medios probatorios se entienden como aquella acción de demostrar la verdad de un hecho, fenómeno o suceso. “La constatación de dicho hecho presupone una relación lógica y metodológica entre un hecho, un orden lógico de los estados de las cosas y un intelecto que aprehende los anteriores” (Vasquez,2010, p.155).

Cabe resaltar que, para abordar el tema de los medios probatorios en concreto, se debe hacer una pequeña mención conceptual de lo que prueba es en sí para dar una esquematización más precisa respecto a los medios probatorios relevantes en los procesos declarativos. En este orden de ideas, Romero (2017) se refiere a la prueba como:

Con todo, es cierto que la “prueba” (del latín *probo*, bueno, honesto, y *probandi*, recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe) refiere a una transpolación entre “un estado de cosas” y lo que se dice de ellas, pero en el ámbito judicial se ha considerado una noción técnica —de método—, que varía según el área o la actividad de que se trate. (p.68)

En sentido estricto, el medio de prueba puede definirse como el canal por el cual la fuente de la prueba puede introducirse dentro de un proceso. De igual forma puede identificarse como la forma que la ley exige para que la fuente de la prueba pueda ser introducida dentro el proceso. Tal y como lo referencia el Código General del Proceso en su artículo 173<sup>8</sup> sobre la incorporación del medio probatorio al proceso, puede inferirse que el medio probatorio en términos generales responde a su concepto siempre y cuando el juez dentro de su apreciación probatoria les dé carácter de validez.

El valor de los medios probatorios en el campo netamente jurídico y principalmente en los procesos declarativos suponen toda una operación probatoria e imperativa. la cual determina la suerte del derecho que está en entredicho, al tiempo que con el esclarecimiento de la verdad de la mano con los medios probatorios se materializa el derecho y no mantiene la incertidumbre de este, así Echandía (2002) lo da entender:

---

<sup>8</sup>“Código General del Proceso, ARTÍCULO 173 sobre *OPORTUNIDADES PROBATORIAS*: Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.”

No hace falta mayor imaginación para comprender la enorme importancia que la prueba tiene en la vida jurídica; sin ella los derechos subjetivos de una persona serían, frente a las demás personas o al Estado y entidades públicas emanadas de éste simples apariencias, sin solidez y sin eficacia alguna diferente de la que pudiera obtenerse por propia mano (sistema primitivo de justicia privada) o por espontánea coincidencia de los demás. (p. 12)

Dentro del marco probatorio existen también los indicios que al igual que los hechos reales enmarcan el sentido de la importancia del elemento probatorio en cuanto permiten una inferencia lógica sobre la existencia de un hecho y en relación con los procesos declarativos los indicios hacen parte de los medios probatorios utilizados para la aproximación de la verdad. Quijano (2015) al respecto menciona:

De ninguna manera se puede definir un medio probatorio como un juicio lógico crítico y menos el indicio; los indicios son hechos, tienen existencia objetiva, se muestran, así como el testigo debe existir y nos aporta al proceso unos hechos, el indicio es un hecho (el medio) que nos aporta al proceso otro hecho. (p. 25)

En cuanto a la finalidad de los medios de prueba más allá del acercamiento a la verdad objetiva y procesal, dentro del proceso su objetivo es lograr la convicción directa del juez respecto de los hechos controvertidos por medio de los distintos medios probatorios aportados por las partes, los cuales se describirán posteriormente.

El convencimiento del juez implica seguridad para aplicar justicia en aras de la verdad procesal, respecto a la conexión lógica entre los medios probatorios y los hechos. “Así mismo, el valor probatorio de los distintos medios aportados por las partes para llegar al convencimiento de lo que se discute debe ser coherente con las finalidades propias del proceso y no puede ser otro diferente que la recta y cabal aplicación de justicia” (Giraldo, 2015, p. 19).



## 2.1. La prueba conducente en los Procesos Declarativos

Bajo los criterios del artículo 168<sup>9</sup> del Código General del proceso se debe para abordar la conceptualización de la conducencia, todo aquello que no pertenece a las consideraciones del juez como elemento probatorio.

De esta manera, la conducencia supone una relación intrínseca entre el hecho a comprobar y la prueba. Dicha prueba no puede ser cualquiera, dentro de sus elementos está el que debe ser idónea es decir adecuada y que conserve una conexión natural con el hecho es decir que su contenido o su forma sea condescendiente al hecho por probar. Quijano (2007) afirma:

La conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de que, con la comparación que se haga se pueda saber si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de este medio probatorio. (p.27)

De lo anterior se puede inferir, que la conducencia es aquella aptitud legal del medio probatorio utilizado para probar el hecho controvertido y que requiere a su vez de dos requisitos. “EL primero es que la conducencia supone que no exista una norma legal que prohíba el empleo del medio para demostrar un hecho determinado. Y de igual forma, el sistema de prueba legal supone que el medio que se emplea para demostrar un hecho está consagrado en la ley” (Quijano, 2007, p. 153).

Es así, como por medio de algunos medios probatorios propios del proceso declarativo y tomando como referencia lo anterior se determina la conducencia de los mismo a fin de generar el sano convencimiento del juez en este tipo de proceso.

### 2.1.1 Declaración de Parte

Este medio probatorio resulta de suma importancia tenerlo en cuenta dentro de la relevancia de los procesos declarativos en tanto por medio de este, se logra un firme convencimiento del juez en cuanto favorecen a una de las partes. Así lo establecieron Artavia & Picado (2015):

---

<sup>9</sup>Código General del Proceso. “ARTÍCULO 168.*RECHAZO DE PLANO*. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.”

Es la declaración rendida por una parte en el proceso o anticipadamente, ante un juez a solicitud de parte contraria, sobre hechos personales, ajenos de su mandante o que el representante cuando se trate de hechos realizados en su función, o que el declarante tuvo conocimiento y que consten, sobre hechos favorables a la parte adversaria. (p.01)

Con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, el juez se ve revestido por un mayor poder de intermediación subjetiva entendida esta como “aquel contacto directo entre el juez y los sujetos procesales o no. La práctica de la prueba en presencia del juez lo describe perfectamente; y una intermediación objetiva es la relación con el contacto directo del juez con las cosas y hechos objeto de debate o que interesan al procesado” (Rico, 2008, p. 146).

Atendiendo a lo anterior, el juez estará mejor facultado para ejercer su libre valoración de la prueba. La declaración de parte renace al ser una prueba autónoma es decir que es suficiente en sí misma, para que así el juez logra obtener contacto directo y personal con las partes, efecto que se rarifica en el inciso final del artículo 191 del referido código al señalar que “la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de las pruebas”, es deber del juez reconocer la autonomía de esta prueba y valorarla como relato acerca de las posibles circunstancias en relación con el conflicto que trata de dirimir con el proceso, que para los actuales efectos es el verbal.

la declaración de parte en relación a la conducencia, se puede decir con las que a criterio propio considero muy acertadas las palabras de Echandía (2002) en donde afirma:

La conducencia de la prueba es requisito intrínseco para su admisibilidad , debe ser examinada por el juez cuando vaya a resolver sobre las pedidas por las partes o las que oficiosamente puede decretar , y persigue un doble fin: (a) evitar un gasto inútil de tiempo, trabajo y dinero, pues la inconducencia significa que el medio quiere utilizarse es ineficaz para demostrar , así sea en concurrencia con otros, el hecho a que se refiere; b) proteger la seriedad de la prueba, en consideración a la función de interés público que desempeña, evitando que se entorpezca y dificulte la actividad probatoria con medios que de antemano se sabe que no prestarán servicio alguno al proceso.(p. 338)

Es importante entender que dentro de la valoración probatoria la conducencia siempre sea el diagrama principal de la ecuación a la que el juez somete para dar el fallo en derecho ya que por

medio de la misma se anexan elementos probatorios suficientes para dicho convencimiento. De igual forma, el reconocimiento de la conducencia en sí mismo es el reconocimiento al objetivismo del hecho y la prueba es importante enmarcarla dentro del plano mismo de la conducencia y aún más importante dentro del plano mismo de la importancia en sí de la prueba en general, como lo manifiesta Hernández (2013):

Sin la prueba el Estado no puede administrar justicia para aplicar el derecho al caso controvertido o a la actuación respectiva. Sin ella el Estado no puede ejercer la función jurisdiccional que le compete, para amparar la armonía social y restablecer el orden jurídico, donde quiera que haya sido infringido; si no existe prueba no puede existir administración de justicia ni orden jurídico alguno. (p. 159)

Así, la declaración de parte hace parte del régimen valorativo de la prueba dentro del elemento de la conducencia en cuanto por medio de esta se puede llevar al juez directamente a su convencimiento siempre y cuando el relato tenga un nexo causal directo con los demás medios probatorios de esa forma hace las veces de justificador y dentro de los procesos declarativos donde su base fundante es la oralidad resulta sumamente importante su aplicación.

## **2.2. La prueba pertinente en los Procesos Declarativos**

La pertinencia al igual que la conducencia es fundamental para llevar el sano convencimiento del juez, y tal como lo menciona Echandía (2006):

La conducencia se refiere a la actitud legal de la prueba respecto del medio mismo o en relación con el hecho por probar, como explicamos en el tema anterior; la pertinencia o relevancia, en cambio, contempla la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio o la materia del proceso voluntario o del incidente según el caso. (p. 325)

De igual forma, “la pertinencia es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba” (Quijano, 2007, p.145).

Cabe señalar que, así como se habla de pertenencia de la prueba, también se debe tener en cuenta el otro lado de la moneda. En este caso, la prueba impertinente hace referencia a “aquella que es ajena a los hechos controvertidos en la causa, aún concerniente a ellos, la carente de trascendencia, sea cual sea su resultado” (Cabanellas de la Torre, 2006, p.567).

En todo proceso declarativo debe estar presente la pertinencia como valoración probatoria en cualquier medio que pretenda demostrar ya que no solo debe existir una relación idónea y legal es decir conducente. Y es así como por medio de los siguientes medios probatorios se materializa la pertinencia como valoración probatoria dentro de los procesos declarativos.

### ***2.2.1 Declaración de Pertenencia***

Dentro del régimen de los procesos declarativos, la declaración de pertenencia es aquel proceso judicial que busca que una persona adquiera el dominio en virtud de la prescripción adquisitiva de dominio. Dicha definición se extrae del artículo 673 del Código Civil<sup>10</sup> el cual precisa los modos de adquirir el dominio y entre ellos se encuentra el de la prescripción. Una de las formas de adquirir el dominio de un bien es mediante la prescripción adquisitiva por medio de la cual se activa la declaración de pertenencia.

Definida la declaración de pertenencia desde su extracción normativa, para dar inicio al proceso, es necesario iniciar este trámite de declaración de pertenencia que se efectúa por el paso del tiempo y cumpliendo los respectivos requisitos. Respecto al asunto propio del elemento de la pertenencia como valoración probatoria, en los procesos de declaración de pertenencia la prueba pertinente la cual se allega al juez para su sano convencimiento es la presentación de testigos junto con certificado de libertad y tradición expedida por la oficina de instrumentos públicos.

Y a través de estos medios pueda probarse los actos de señor y dueño que cumplía la parte demandante en el inmueble objeto de la posesión. Como elemento de pertinencia estos medios probatorios pueden aportar al razonamiento lógico del juez el cual dará su fallo en derecho teniendo como eje el elemento de conducencia y a su vez aquel de pertinencia que le ayude a fortalecer su argumento final.

---

<sup>10</sup> Ley 57 de 1887, por medio de la cual se expide el CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO. ARTICULO 673: “Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.”

### 2.2.2 Resolución de Compraventa

Este tipo de contratos contemplados en la legislación actual<sup>11</sup>, hace referencia al incumplimiento por una de las partes en un contrato de compraventa. Ya sea el vendedor o el comprador. Dentro de los procesos declarativos para que este opere no debe existir un contrato que obligue a una de las partes al pago del precio de una cosa para que así el juez declare la obligación y procede a la resolución de este. Como soporte a lo anterior, la sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 1209 de 2018 afirma lo siguiente:

Igualmente, si la pretensión invocada no es la resolutoria sino la de cumplimiento del pacto, quien así lo demande requiere haber honrado sus compromisos o haberse allanado a hacerlo, aun en el supuesto de que su contraparte lo haya hecho previamente.

En resumen, puede deprecar la resolución de un acuerdo de voluntades el contratante cumplido entendiéndose por tal aquel que ejecutó las obligaciones que adquirió, así como el que no lo hizo justificado en la omisión previa de su contendor respecto de una prestación que éste debía acatar de manera preliminar. (p. 16)<sup>12</sup>

De forma muy somera, la conducencia en los asuntos de resolución de compraventa se demuestra con el contrato de compraventa para demostrar la obligación que se encuentra vigente entre las partes (Comprador-Vendedor) siempre y cuando exista documento que preste mérito ejecutivo. Pues no será necesario un proceso declarativo sino uno ejecutivo valga la redundancia.

Resulta curioso que la pertinencia en los asuntos de resolución de compraventa tome mayor importancia que la misma conducencia en cuanto por medio de esta se puede acudir directamente al proceso declarativo. Ya que con la mera existencia de documento que preste mérito ejecutivo como se ha mencionado anteriormente, a lo que se acude es a un proceso ejecutivo.

A falta de este documento el cual es la letra de cambio o título valor y con la existencia del bien se podrá pedir la declaración del juez para ejecutar la obligación debida y de esta forma

---

<sup>11</sup> Código General del proceso, Artículo 374 sobre *RESOLUCIÓN DE COMPRAVENTA* en concordancia con la ley 84 de 1873 actual código civil Colombiano, artículo 1932 sobre EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN POR NO PAGO.

<sup>12</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC 1209-2018, sobre *EL PROCESO DECLARATIVO Y LA RESOLUCIÓN DE COMPRAVENTA*. Magistrado Ponente: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

demostrar que la pertinencia no solo se vuelve más beneficioso para la parte interesada, de igual forma se vuelve más útil y rápido porque la misma declaración del juez en conocimiento de la existencia del objeto genera un convencimiento concreto y lógico que parte de la pertinencia hasta la materialización del interés de la parte.

Finalmente, respecto a las solemnidades, Sendra (2010) afirma lo siguiente:

El juicio ejecutivo es un “proceso declarativo, especial y sumario, que tiende a la formación rápida de un título puro de ejecución con base en la presentación de una serie de documentos que, por la forma de su producción, tienen un carácter privilegiado al estar revestidos de las solemnidades y formalidades que, “prima facie”, hacen pensar en la existencia de una obligación válida y perfecta. (p. 163)

### **2.3. Prueba útil en los Procesos Declarativos**

La utilidad de la prueba dentro de los procesos ya descritos hace referencia a aquellas pruebas que, si bien no llevan a convencimiento del juez, facilitan su criterio a juicio dentro de estas. De modo que, si una fuente de prueba contiene información útil para acreditar o refutar una afirmación de hecho en controversia, esa fuente debe ser aceptada como un medio probatorio idóneo; de lo contrario, si la información es superflua para el caso dicha fuente no puede ser usada como medio de prueba ya que su aporte debe ser concreto.

Lo anterior, se puede contrastar como lo hace la corte:” la utilidad de la prueba se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente” (CSJ AP, 17 de Marzo, Rad. 22053). La utilidad como elemento de valoración de la prueba también contribuye a la admisibilidad misma ya que por medio de la utilidad se desprenden criterios de valoración lógica del juez. “Lo de útil tiene que ver con que la prueba sea provechosa, fructuosa, adecuada, buena, eficaz, apta” (Artavia ,2015, p. 21).

#### **2.3.1. Utilidad en la Declaración de Pertenencia**

Tal y como se mencionó en el acápite sobre la pertinencia en este tipo de situaciones propias de los procesos declarativos, las pruebas útiles que refuerzan el convencimiento del juez pueden ser aquellos documentos mediante los cuales se pueda probar que por parte del demandado han efectuado pagos de impuestos, servicios públicos, por medio de recibos de pago o transferencias bancarias. Con la presentación de dichos documentos se materializa la funcionalidad de la utilidad

probatoria en tanto son medios probatorios que aportan al proceso un fortalecimiento de legitimidad y legalidad.

Dicha funcionalidad de la utilidad como elemento probatorio la hace valer dentro de los procesos declarativo en tanto “la relevancia de los medios probatorios se determina en atención a la utilidad de la información que contienen las fuentes de prueba y que, por su parte, la admisibilidad de aquéllos se establece en consideración a la idoneidad jurídico-procesal de la misma información” (Meneses, 2008, p. 24).

Siguiendo esta premisa básica si la pertinencia es la presencia de testigos y documentos solemnes, pues los documentos como elemento de utilidad sirven para reforzar y determinar la verdad racional y procesal del testimonio, es decir, que por medio de la presentación de medios probatorios útiles como documentos que acrediten un pago, los testimonios se pueden corroborar o no dependiendo su relación fáctica con los documentos presentados como útiles.

Respecto a las pruebas pertenecientes al animus y corpus en relación a la declaración de pertenencia cabe mencionar que estos dos elementos de la posesión en lo que concierne a los procesos de pertenencia tal y como lo asegura Serrano (2017):

En cuanto al corpus, se entiende que es la explotación material del bien, los “actos positivos de explotación de aquellos a que sólo da derecho el dominio”, como podría ser la construcción de mejoras, cercar, alambrar, alinderar, sembrar y cosechar, entre otros actos posesorios de tipo material. Lo esencial para considerar las actuaciones como “actos posesorios” es que hayan sido ejercidos con animus domini, elemento volitivo de la posesión. (p.102)

### ***2.3.2. Utilidad en la Resolución de Compraventa***

Finalmente, para terminar lo relacionado a la conducencia, pertinencia y utilidad, el último elemento probatorio respecto a los procesos de resolución de compraventa se materializan mediante el contrato de compraventa el cual al igual que la pertinencia su medio probatorio es igual ya que por medio de la presentación del contrato se puede evidenciar la relación jurídica entre las partes (comprador – vendedor). De igual forma se puede allegar como utilidad y conducente, la verificación de la existencia del bien ya que es la que acredita el objeto del contrato por el cual se generó la controversia.

A su vez, respecto a la configuración conceptual de la resolución de compraventa se puede mencionar que se está en presencia de la misma “cuando se presenta la inejecución de una obligación contractual. Dicho de otro modo, la resolución sanciona una vicisitud que se presenta en el período de ejecución de la convención” (Mantilla y ternera,2005, p.48).

De esta forma se puede decir que la resolución del contrato de compraventa se materializa con el incumplimiento de una de las partes de la obligación pactada. Y como se mencionó anteriormente, frente al eje temático probatorio respecto de los contratos de compraventa como anexo de prueba se puede allegar el contrato de compraventa como documento base que establece la relación contractual y a su vez la obligación que lo genera.

Siendo así el orden de las cosas, la travesía formal sobre la importancia de los medios probatorios desde una mirada de sus elementos probatorios valga la redundancia. bien sean la conducencia, pertinencia y utilidad es suficiente para enmarcar a continuación no un esquema netamente formal sino material. Que busque indagar aquellos formalismos propios de los procesos declarativos.

### **3. El camino hacia la economía procesal por medio de herramientas propias del Código General del Proceso**

Para establecer un legítimo camino hacia el entendimiento de la economía procesal como mecanismo cuya finalidad es poder brindar agilidad en los procesos es menester propio realizar un recorrido por la doctrina para así poder determinar cómo es el funcionamiento práctico de este mecanismo en nuestro sistema jurídico. Desde una visión histórica, la economía procesal se ha presentado como un principio rector e informativo del derecho procesal que influye directamente en la estructura y funcionamiento del proceso mismo, tal y como lo describe Carretero (1971) así:

En un sentido muy genérico, la economía procesal es un principio informativo del Derecho procesal que, de forma más o menos intuitiva, influye y configura la estructura y el funcionamiento del proceso; en ese aspecto sería la razón que procurará que el proceso consiga su fin, la satisfacción de las pretensiones con el mayor ahorro posible de esfuerzo y de coste de las actuaciones procesales; obtener el máximo rendimiento con el mínimo gasto y tiempo, lo que podría llamarse la economía en el proceso. (p. 101)



De esta forma se puede evidenciar como Carretero desde una visión histórica realiza una descomposición del concepto de economía procesal, desde un sentido amplio el cual como se describió anteriormente este principio propio del derecho procesal busca la mayor celeridad posible de esfuerzo y de costo de las actuaciones procesales. Y desde un sentido estricto “A la luz de la economía procesal deberían interpretarse, en caso de duda, todas las normas procesales, Sería junto con el principio de composición de los intereses contrapuestos, uno de los principios filosóficos superiores sobre los que se asentará toda la dialéctica procesal” (Carretero ,1971, p. 103).

La forma en cómo se manifiesta este principio ya sea desde aquellas que buscan evitar el proceso como la conciliación, el allanamiento como figura que busca terminar el proceso, el litisconsorcio y la acumulación de pretensiones como aquellas figuras que se adaptan más a este principio de economía procesal ya que se centran en recortar esfuerzo y dentro de este marco amplio de la economía procesal se encuentra finalmente la reconvención como medio de unificación de demandas.

De esa manera se enmarca una primera definición de este principio de economía procesal que va introduciendo el camino mismo del principio como herramienta en nuestro ordenamiento jurídico. Otro de los doctrinantes que trata el tema de economía procesal y que se asemeja al manejo que se da en Colombia, menciona respecto al principio de economía procesal “aquel que pretende una proporción entre el fin que se persigue en el proceso y los medios en aras de una agilidad procesal” (Puppio, 2008, p. 182).

Nuevamente se hace tránsito al concepto de agilidad o ahorro como eje fundamental de este principio y en fundamental entender que bajo el marco de nuestro sistema jurídico colombiano pretende precisamente garantizar la agilidad procesal bajo ciertas herramientas propias del Código General del Proceso que desde un marco netamente formal son eficaces a la hora de acceder a la administración de justicia. Dichas herramientas responden al concepto en sentido estricto de la economía procesal.

Siendo así, en el Código General del Proceso, están plasmadas herramientas vinculantes a la economía procesal que de ser aplicadas en ciertas situaciones brindan una mayor celeridad en trámites judiciales

Una de las herramientas, que materializan la economía procesal en el ordenamiento jurídico Colombiano es por medio del término perentorio de duración del proceso. Por medio de este, establecido en el artículo 121 del Código General del Proceso, el juez o magistrado puede proferir sentencia de primera o segunda instancia. Esta determinación dio con el propósito de garantizar la respuesta judicial inmediata a las demandas de justicia, cuyo precedente fue introducido en la ley 1395 de 2010<sup>13</sup>. Sin embargo, el Código General del Proceso introdujo la figura de la prórroga y nulidad de pleno derecho en el mismo artículo 121 a todas las actuaciones proferidas por el juez por fuera de tiempo, sanción que dentro del principio de economía brindaba una mayor garantía a su vez al principio de celeridad.

Este principio de celeridad se define y responde dentro de la dinámica del término perentorio de duración del proceso como lo afirma Gutiérrez (2009) así:

El derecho de todo ciudadano a un proceso sin dilaciones indebidas y que su causa sea oída dentro de un plazo razonable, sin retrasos, además es una obligación para los órganos judiciales de actuar en un plazo razonable, de resolver la controversia entre particulares dentro de los lapsos establecidos en la norma. (p.28)

Gran variedad de herramientas procesales encaminadas al alcance de la economía procesal están estipuladas en el ordenamiento jurídico Colombiano. Dentro de la ya descrita no puede obviarse una sumamente importante, y esta es la carga dinámica de la prueba. Esta herramienta considerada así por el Código General del Proceso tiene otra connotación “La carga dinámica de la prueba es una regla de juicio en materia probatoria, vigente en el ordenamiento jurídico Colombiano, que consiste en asignar el gravamen de probar a la parte que se encuentre en mejores condiciones para hacerlo” (Restrepo, 2016, p. 01).

Es menester mencionar que el artículo 167 del Código General del Proceso estipula la carga dinámica de la prueba, la cual fue declarada exequible tras ser demandada en tanto su interpretación de la expresión “podrá” daba a entender que le permite al juez que se encargue de distribuir la

---

<sup>13</sup> Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.

carga probatoria ya sea de oficio o a petición de parte. En dicha demanda<sup>14</sup>, los accionantes afirman que el juez no debía tener ese poder.

A lo que la Corte afirmó, por lo contrario, que le entregaba dicha facultad al juez para ajustar a la justicia el procedimiento en donde se debía asegurar la igualdad material que a su vez requiere un rebalanceo de la carga de aportar pruebas al proceso. Así por medio de esta regla procesal se evita un perjuicio a la economía procesal en cuanto al no provocar una innecesaria actividad probatoria cuando los hechos controvertidos han quedado debidamente delimitados y fijados no tendría por qué extenderse el proceso.

Otra de las grandes herramientas con que cuenta el Código General del Proceso que permiten la materialización de la economía procesal es el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs) que a partir de la Ley Modelo de la CNUDMI<sup>15</sup> sobre Comercio Electrónico<sup>16</sup> el mundo entró en la era digital del documento. Desde entonces, se han venido incluyendo en Colombia diferentes herramientas que buscan enriquecer la prestación del servicio público de la administración de justicia, esto con el fin de iniciar una carrera evolutiva junto con la sociedad, que como es un hecho conocido, esta es cambiante y a medida que el tiempo avanza, produce una evolución constante de la tecnología.

Cabe resaltar que Colombia fue considerado como uno de los pioneros al implementar esta normativa en su ordenamiento jurídico, dentro del espacio geográfico del continente americano, y que, en estos momentos de la crisis sanitaria, cobran gran relevancia y mayor vigencia en su aplicación, ya que no solo los aspectos mencionados líneas atrás son regulados en este precepto legal sino otros como lo menciona German, F (2014) así:

El principio de equivalencia funcional de documentos escritos, la eficacia probatoria de la prueba digital, la formación de los contratos celebrados por medios electrónicos, y el acuse de recibo, el cual es tal vez uno de los mecanismos más importantes en este momento por las medidas que se han adoptado, tendientes a mitigar la crisis y que de alguna manera

---

<sup>14</sup> Corte Constitucional, sentencia C-086 de 2016 sobre *CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA* conforme a la Facultad del juez para distribuir la carga de la prueba. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.

<sup>15</sup> Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

<sup>16</sup> Naciones Unidas, Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico Guía para su incorporación al derecho interno con la Guía para su incorporación en el Derecho Interno 1996 con el nuevo artículo 5 bis aprobado en 1998. (New York: Naciones Unidas, 1999).

modifican el procedimiento de las notificaciones en virtud del estado de emergencia y que era necesario regular para que la prestación del servicio en la administración de justicia no se viera afectado.(p.46)

Con posterioridad a la expedición de la resolución mencionada y varios años después, nace la ley 1564 de 2012 actual Código General Del Proceso que viene cargada con varias novedades que buscaban imprimirles celeridad, eficacia y eficiencia a las actuaciones procesales para así emprender el camino hacia la economía procesal. De igual forma, permitió la formación de los expedientes de forma electrónica y de esa manera dándole ahora una mayor efectividad a los mensajes de datos y algunos otros medios electrónicos que en la época actual van a tomar una mayor relevancia.

Antes del Código General del Proceso ya existía la ley 1437 de 2011<sup>17</sup>. Esta ley expresamente permite el uso de las TICs en los procesos judiciales, las cuales a su vez han sido impuestas a la Rama Judicial para así desarrollar planes de modernización y adecuación para que las incorporen gradualmente en el manejo de administración de justicia. Respecto a estas herramientas en pro de la economía procesal desde esta óptica de las herramientas digitales, Casallas (2010) afirma:

La administración de justicia origina una cantidad ingente de información, que va desde las notificaciones de los actos procesales, hasta el pronunciamiento de la sentencia, digitalizar esa información es una de las áreas más frecuentes de intervención de e-Justicia y de las que más impacto logra a corto plazo. La e-Justicia quiere ser herramienta para la descongestión judicial y, por tanto, no se contenta con dotar de instrumentos tecnológicos, sino que busca un cambio en la forma de gestionar y de operar la justicia. (p. 47)

De esta forma, bajo los preceptos del Código General del Proceso, es preciso ilustrar<sup>18</sup> un recuento de los artículos del código en mención que acuden a las TICs como una herramienta para ahorrar recursos y que proyectan el principio de la economía procesal:

---

<sup>17</sup> Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y regula el tema de las notificaciones por vía electrónica.

<sup>18</sup> Tabla de creación propia tomando como referencia algunos de los artículos del Código General del Proceso ilustrados en el cuadro que proyectan el principio de economía procesal.

<b>ARTÍCULO 74:</b>	“Permite conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.”
<b>ARTÍCULO 78:</b>	“Inciso 14: Obliga a las partes y sus apoderados a enviar a los correos electrónicos de las partes, los memoriales que alleguen al proceso”
<b>ARTÍCULO 82:</b>	Permite la presentación de las demandas mediante mensaje de datos, exonerando al actor de la necesidad de tener firmado digitalmente el documento.
<b>ARTÍCULO 89:</b>	Donde se haya habilitado en Plan de Justicia Digital, no será necesario presentar copia física de la demanda.
<b>ARTÍCULO 96:</b>	Obliga a las partes a suministrar su correo electrónico al contestar la demanda.
<b>ARTÍCULO 103:</b>	“En todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales.”
<b>ARTÍCULO 105:</b>	“Permite la firma electrónica, pero previa reglamentación por el Consejo superior de la judicatura.”
<b>ARTÍCULO 122:</b>	Permite la elaboración del <b>expediente digital</b> , “En aquellos juzgados en los que se encuentre implementado el Plan de Justicia Digital, el expediente estará conformado íntegramente por mensajes de datos.”
<b>ARTÍCULO 247:</b>	“permite la valoración de mensajes de datos e incluso su valoración en impresiones físicas.”
<b>ARTÍCULO 291:</b>	“permite la notificación personal de forma electrónica, esto es al correo de la persona natural o jurídica que tenga registrado en la Cámara de Comercio, si ejerce como tal, o al correo de quién lo haya registrado en el respectivo juzgado que conoce del proceso.”

<b>ARTÍCULO 292:</b>	Este artículo aclara que, si no es posible la notificación personal, se hará por aviso, el cual también podrá ser hecho por correo electrónico.
<b>ARTÍCULO 295:</b>	permite la notificación por estado mediante mensaje de datos.
<b>ARTÍCULO 452:</b>	permite hacer remates por medios electrónicos, siempre que tenga garantías sobre su integridad.

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia los artículos del Código General del Proceso ilustrados en el cuadro.

Es claro que para la administración de justicia existe un reto en la implementación de la tecnología, que sin duda con un buen uso y aplicación haría más fácil el acceso a ella. Es pertinente mencionar que esta implementación ha tomado mayor relevancia en estos tiempos por razón de la pandemia de COVID-19 y el estado de emergencia, se han tomado una serie de medidas para tratar de mitigar el impacto que dicha emergencia ha generado en los diferentes sectores incluyendo la prestación de un servicio público esencial como lo es la administración de justicia.

Antes de que surgiera dicha situación de emergencia, ya era difícil para los ciudadanos acceder a la administración de justicia a resolver sus conflictos con la eficiencia, eficacia y celeridad que las personas esperan de un sistema judicial. Al declararse el estado de emergencia se puede decir, que se ha duplicado la dificultad y además se ha convertido en un reto tanto para las autoridades como para los profesionales que se desempeñan en el área jurídica.

En ejercicio de las facultades que el gobierno adquiere por mandato constitucional para expedir decretos con fuerza material de ley, se expidió el decreto 806 del 2020<sup>19</sup> que tiene relación con las nuevas disposiciones que van a regir para la administración de justicia en vigencia del estado de emergencia, cuyo fin es tratar de mitigar la problemática y seguir prestando el servicio público esencial a la comunidad y que ha sido imposible que este se preste de forma presencial como se había venido ejecutando a lo largo de la historia.

Como es sabido, en la actualidad el mundo afronta una difícil situación por culpa de la emergencia sanitaria, lo que ha afectado el desempeño de la administración de justicia de manera

---

<sup>19</sup> “Decreto 806 de 2020, Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”

presencial lo que llevó a una reinversión de esta. Pasar de organizar todos los requerimientos de los ciudadanos en expedientes físicos a almacenarlas en expedientes digitales que aún está en desarrollo, pero existe la figura de los expedientes híbridos, lo cual consiste en escanear los documentos que se encontraban en los expedientes físicos para transformarlos en digitales y de esa manera garantizar a las partes procesales, el acceso a estos y además poder continuar con la prestación del servicio.

A través del decreto 806 se ha implementado la figura de la justicia digital, la cual Quiroz (2020) ha definido como:

Herramienta de política pública que sirve para asegurar la eficacia del derecho de acceso a la administración de justicia, sobre todo en esta época en tiempos de pandemia, esto para permitir que la administración de justicia siga funcionando y además asegura que las partes accedan a la justicia en términos de oportunidad y facilidad. (p. 41)

La mayor dificultad en todo este proceso de digitalización se presenta en la práctica, al tratar de llevar a cabo todo lo que se ha plasmado en las normas y que se ha tratado de implementar en las diferentes actividades que se han estado realizando digitalmente, ya que ha costado un poco acostumbrarse a la virtualidad que, en razón de la emergencia sanitaria, en pocas palabras llevó a la administración de justicia a su reinversión.

Si bien es cierto la implementación de la tecnología es un gran avance que además tendría beneficios a largo plazo que ayudarían a ahorrar costos del papel que se utiliza.

Otros beneficios como la celeridad en los procedimientos, puede ser un arma de doble filo. Ya que se ha podido evidenciar en el poco tiempo que se ha implementado para garantizar un buen servicio, eficiente y que todas las personas puedan acceder al mismo, debe ir de la mano de otros factores que se convierten en un reto para el Estado Colombiano. Como por ejemplo garantizar el acceso a internet de la población, que sea una política inclusiva de las personas que no poseen los recursos suficientes para adquirir por sus propios medios dicho servicio.

Se puede deducir que la implementación de la administración de justicia en Colombia hacia el camino de la economía procesal debe transitar por un proceso de conocimiento. Y que sea la regla de la experiencia la que dicte las falencias que se tienen y permita mejorar para no descartar de

plano un sistema que a largo plazo puede generar muchos beneficios practico- económicos en la prestación de un servicio público esencial<sup>20</sup> en este caso, el acceso a la administración de justicia.

#### **4. Manejo de la normatividad procesal en Colombia en la administración de justicia desde el Código General del Proceso**

Partiendo del contenido que ofrece el Código General del Proceso, respecto al camino que esté enmarca para alcanzar una economía procesal por medio de las herramientas ya descritas anteriormente, es preciso mencionar que desde la misma creación normativa existen ciertos inconvenientes que no permiten un manejo óptimo de los procesos como garantía al acceso a la administración de justicia.

Uno de los inconvenientes a saber, es que el actual Código General del Proceso heredó una tradición jurídica de su predecesor como lo es el Código de Procedimiento civil de 1970 el cual respondía al modelo de Estado existente cuando fue promulgado, es decir, al Estado que la Constitución Política de 1886 fomentó en su preámbulo<sup>21</sup> y que de corte político, económico y conservador se basó en la formalidad propia de la época al no existir otros medios para el ejercicio del derecho. Lo cual trajo como consecuencia la herencia de un entendimiento y tradición de interpretar la jurisprudencia de forma taxativa y no material.

Esta tradición jurídica trajo como consecuencia en la elaboración del Código General del Proceso una adaptación tardía al mismo en cuanto la realidad social, política, económica e incluso cultural ya que no respondía a los preceptos de un estado liberal sino a un Estado social de derecho en consolidación. Y como consecuencia de ese desconocimiento contextual, muchos administradores de justicia en vigencia del Código General del Proceso perpetraron prácticas obsoletas como la no adecuación de herramientas tecnológicas mencionadas anteriormente en los

---

<sup>20</sup> “Código Sustantivo del Trabajo, Artículo 430 sobre *LOS SERVICIOS PÚBLICOS*: toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas.”

<sup>21</sup> “Constitución política de Colombia de 1886, *PREAMBULO*: En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la religión católica , apostólica y romana es de la Nación , y que como tal , los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social y para asegurar los bienes de la justicia , la libertad y la paz, el pueblo colombiano , en plebiscito nacional.”



despachos por falta de capacitaciones a los funcionarios en un contexto que ya no requería de las mismas.

Respondiendo a esta crítica, en la doctrina colombiana varios autores han manifestado su descontento con la pronta adecuación sin contexto del Código General del Proceso lo cual generó vacíos directos a la administración de justicia.

Incluso muchos hablan de que fue creado bajo la conspiración de formular un código que respondía a la solución jurisprudencial del continente en materia de descongestión procesal. Algo así como una carrera por la evolución jurídica sin tener en cuenta las necesidades básicas de cada país. Así, por ejemplo, Rueda (2017) menciona:

El resultado del Código General Del Proceso es a la medida de esos poderosos, lo cual implicó un abandono por los redactores del proyecto de la oportunidad de efectuar una verdadera revolución en esa área jurídica, en perjuicio del gran número de usuarios de la justicia que han esperado ansiosamente una normativa que responda a sus necesidades. (p. 222)

Atendiendo a la línea descriptiva de la aplicación del Código General Del Proceso bajo una descontextualización social, Villareal (2018) aduce:

Ello no significa que nuestro país no esté imbuido en todas sus instituciones jurídicas y judiciales de un fuerte activismo, sino que este es el resultado de una aplicación ideológica que se hace de manera un tanto inconsciente por parte del colectivo, y no, propiamente dicha, producto de la reflexión en torno a la forma como se concibe un proceso. (p. 894)

Al margen de las críticas anteriormente mencionadas, las reflexiones a comentar se centran en dar claridad sobre como bajo los preceptos del Código General del Proceso la eficacia procesal en la administración de justicia no es netamente óptima como este código lo prevé.

Respecto a las imprecisiones y contradicciones que tienen su origen tanto en el texto de la ley como en la interpretación del mismo, es menester mencionarlas siempre y cuando no controvierta la integridad del Código General del Proceso en su contenido. Estas imprecisiones y contradicciones identificadas se ilustran así:

<p>1. “<i>La oralidad no ha tenido la trascendencia esperada</i>: la regla se ha invertido, es decir, solamente se tramita en audiencias oral y pública lo que la ley expresamente dice que así debe hacerse, en parte porque el Código General del Proceso no derivó consecuencias de su incumplimiento.”</p>
<p>2. “<i>Algunos de los conceptos de la Ley 1564 de 2012 son indeterminados</i>: lo cual abre paso a que cada operador judicial los faculte de contenido a su arbitrio, con lo que se vulnera directamente la seguridad jurídica.”</p>
<p>3. “<i>Existen trámites que son superfluos en ciertas circunstancias</i>: aunque podría deducirse de una hermenéutica sistemática del Código General del Proceso, sin embargo, los operadores judiciales no lo hacen así porque las normas no lo prevén expresamente.” Es decir, se está bajo el marco de una taxatividad por conveniencia.</p> <p>Ejemplo de esos trámites superfluos es la exigencia que se hace al apoderado demandante de contar con la facultad para recibir, a efectos de poder solicitar la terminación del proceso por pago total de la obligación demandada más costas procesales lo cual se convierte en un bloqueo para la terminación unilateral del proceso.</p>
<p>4. “<i>Existen trámites innecesarios en todas las circunstancias que se les vea</i>”: esto vulnera directamente el principio de economía procesal en tanto el Código General del Proceso dentro de su contenido exige demasiadas formalidades que dilatan la eficacia de los procesos. Estos trámites por ejemplo hacen referencia a la indicación de extremos procesales en la demanda en el artículo 82 inciso segundo de Código General de Proceso<sup>22</sup>. Esta conservación se encuentra en los anexos de la demanda por lo que vuelve innecesario que se establezca como una condición formal.</p>
<p>5. “<i>El Código conserva formas del Código de Procedimiento Civil que convendría desterrar</i>”: Esto a su vez no permite que exista como se ha mencionado anteriormente una correcta contextualización de aplicación del Código General del Proceso. Estas formas que ese han conservado por ejemplo son que en las demandas se deba indicar el domicilio de las partes (artículo 82.2 <i>ibidem</i>) en tanto que esto debería exigirse cuando sea un criterio</p>

<sup>22</sup> “Código General del Proceso, ARTICULO 82 sobre *REQUISITOS DE LA DEMANDA* inciso 2: El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).”

para fijar la competencia del juez más en los demás casos no debería ser condición del escrito demandatorio ya que no sería perjudicial para el curso del proceso dicha exigencia.

Fuente: Elaboración propia. La anterior ilustración con anotaciones propias adicionales fue tomada como referencia del artículo *Sugerencias para la primera reforma al código general del proceso*<sup>23</sup> de Helver Bonilla García. (2017)

Estas observaciones llevan a determinar que el Código General del Proceso, aunque superior que el Código de Procedimiento Civil, es una obra de difícil aplicación ya que mantiene dinámicas de la legislación anterior y brinda la oportunidad para ser desacatado impunemente lo que afecta directamente la eficacia procesal y trae como consecuencia un desequilibrio en el manejo y alcance a su vez de la economía procesal en tanto diluir con formalismos innecesarios actuaciones que pueden ser surtidas sin tanto trámite alejándose así de la congestión judicial.

La eficacia procesal en armonía con la economía procesal en la administración de justicia bajo los preceptos del Código General del Proceso al no contar con una aplicación no solo social sino histórica propio de nuestro tiempo, muchos de los trámites son obsoletos y en la práctica aún siguen siendo visibles lo cual afecta directamente la eficacia de los proceso en tanto se genera dilatación procesal por exceso de formalismos tales como el diligenciamiento exhaustivo de datos personales cuando ya existen base de datos que los contienen y por esa razón y por el principio de economía procesal se vuelve deficiente.

Realizando una retrospectiva, al principio se mencionaron varios procesos declarativos que responden a premisas formales o taxativas que el Código General del Proceso prevé para su trámite y ejecución. lo que tienen en común estos procesos con las premisas de celeridad y economía procesal es que al existir trámites engorrosos para su futura prosperidad dicho camino formal dilata la esencia misma de la economía procesal la cual es la celeridad procesal y al no existir dicha celeridad, la eficacia procesal de igual forma se difumina en el camino en tanto no proyecta el objetivo mismo del proceso el cual es obtener la prosperidad de la situación jurídica en controversia objeto de litigio.

---

<sup>23</sup> Bonilla G, H. (2017). *Sugerencias para la primera reforma al código general del proceso*, recuperado de <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/view/4272/4049> el 02 de noviembre de 2020.

## Conclusiones

La economía procesal como pilar fundamental de la eficacia de la administración de justicia es entendida como aquel principio que permite conseguir un mayor resultado con mayor celeridad por parte de la administración de justicia. Cabe resaltar que dicho esfuerzo por más mínimo que sea no significa que sea paupérrimo o perezoso; al contrario, es un esfuerzo óptimo que se aleja de formalismo que puedan generar dilataciones y presentación de un sin número de formalismos que obstruyen el objetivo de este principio es cuál es la búsqueda de la celeridad procesal.

La aplicación inmediata de este principio genera una celeridad procesal propia de su objetivo en la solución de litigios que se puedan presentar con el fin de impartir una sana y pronta justicia. Con relación a su eficacia y haciendo alusión al objetivo plasmado en relación a los elementos de conducencia, pertinencia y utilidad de los medios probatorios específicamente en los procesos declarativos, a lo largo de la redacción se puede ver como el Código General del Proceso brinda herramientas en beneficio de la economía procesal y que en los procesos declarativos como los de pertenencia resulta útil aquellos medios para probarla.

Dentro de la materialización del principio de economía procesal en concordancia con la normatividad procesal es menester mencionar de igual forma el desarrollo que se le dio a los elementos del régimen probatorio como lo son la conducencia, pertinencia y utilidad de los medios probatorios. Y es que estos elementos son de suma importancia dentro del objetivo de la economía procesal ya que por medio de estos el juez puede determinar automáticamente qué medios probatorios que concurren en un proceso declarativo son desechados y cuáles son los idóneos según su conducencia para alcanzar su convencimiento.

Dicho convencimiento puede ser tan fiel a la norma que su procedibilidad será ágil y por ende no será necesario decretar más pruebas, rechazando así aquellas que podrían ser utilizadas en instancias innecesarias evitando la extensión de los procesos y dar de esta forma cumplimiento a la celeridad procesal. Formalmente estos elementos probatorios en mención funcionan en tanto permiten una mayor objetividad en el convencimiento del juez pero se ponen en tela de juicios dentro del régimen de la eficacia procesal en cuanto en su práctica al existir formas de dilatación procesal como la presentación de múltiples recursos para desviar el curso del proceso en litigio van, difuminando el carácter probatorio y objetivo de estos medios haciéndoles perder credibilidad en las demás instancias en que se lleve a cabo el proceso.

Por eso fue necesario mencionar la conceptualización general requerida en los procesos declarativos con relación a los elementos probatorios de la conducencia, pertinencia y utilidad ya que, si bien son efectivos, estos pueden ser refutados y en esa refutación valga la redundancia genera cierta desconfianza a la búsqueda de la economía procesal por medio de estos elementos en tanto se pueden poner en duda, lo que genera una extensión del proceso en sí.

Pero no todo está perdido , respecto a la pregunta de investigación planteada al principio del artículo , se puede decir que efectivamente bajo los criterios de la implementación de las TICs como nuevas herramientas que impulsan la celeridad procesal , la jerarquía de los medios probatorios de pertinencia , utilidad y conducencia si son relevantes en tanto por medio de los mismos en relación a los procesos declarativos su practica y valoración oportuna del juez llevan al cumplimiento somero del principio prisma de la economía procesal el cual es brindar celeridad y eficiencia en la administración de justicia .

Como se mencionó en apartados anteriores, si bien aun falta camino por recorrer, la ley 1564 de 2012 dentro de sus limitaciones e innecesarias reglas formales como el apartado de notificaciones en el escrito de la contrademanda ha encaminado desde su ejecución un arduo recorrido por los senderos de la celeridad procesal para así descongestionar el acceso a la administración de justicia, haciéndola más amigable y confiable ante los ojos de la sociedad.

Cabe reconocer que el Código General Del Proceso tal y como se mencionó y se reconoció en la tercer parte de este artículo dentro de su creación y funcionamiento existen herramientas que pueden ser utilizadas para alcanzar la celeridad procesal entendida como el fin mismo de la economía procesal , pero el problema no solo recae en las refutaciones de los medios probatorios en cuanto genera una extensión del procesos sino también en la falta de aplicabilidad de estas herramientas en un contexto social determinado.

la creación del Código General Del Proceso antecede su herencia del anterior Código de Procedimiento Civil en cuanto las prácticas obsoletas en la administración de justicia de muchos abogados litigantes con ideales conservadores no se adecuan a una realidad totalmente distinta, no solo jurídica sino social. Lo cual implica que a la hora de hablar de eficacia procesal pues estará distorsionada su finalidad la cual es brindarle celeridad y prosperidad del proceso, ya que las prácticas obsoletas de la administración de justicia no van a permitir que la realidad de un proceso se adecua formal y materialmente a sus necesidades, ya que no tienen como referencia un contexto

determinado, y se parte de una presuposición procesal y dogmática basada en ideales descontextualizados.

Es preciso mencionar que el camino de la economía procesal junto con el manejo de la eficacia procesal en el ordenamiento jurídico Colombiano, es de suma importancia en tanto no solo es suficiente contar con un contenido formal para su cumplimiento, sino que se deben aplicar dentro del camino que debe llevar para una economía procesal realmente definida y consolidada, factores externos al jurídico.

Porque si el estudio de la economía procesal solo se queda en el ámbito jurídico y no socio-jurídico como debe ser, pues su resultado será deficiente y siempre existirán maneras procesales de dilatar procesos. Y al no haber una consolidación y aún peor existiendo todavía deficiencias en el manejo mismo de la economía procesal desde la óptica del Código General del Proceso pues no será posible contar con una verdadera eficacia procesal y mucho menos con la consolidación del principio de economía procesal en nuestro ordenamiento jurídico Colombiano.

## REFERENCIAS

- Agudelo, Ó. A. (2018). *Los calificativos del derecho en las formas de investigación jurídica*. En Ó. A. Agudelo-Giraldo, J. E. León Molina, M. A. Prieto Salas, A. Alarcón-Peña & J. C. Jiménez-Triana. *La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación* (pp. 17-44). Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Recuperado de <https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/la-pregunta-por-el-metodo-derecho-y-metodologia-cato.pdf> el 23 de marzo de 2021.
- Artavia, S. & Picado V. (2015). *La prueba en general*. Costa Rica. Instituto costarricense de derecho procesal científico. (1), pp.01-05.
- Bahamonde Vinuesa, V.C. (2018) *El procedimiento ejecutivo en el Código Orgánico General de Procesos* (tesis de maestría) Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Tomando como referencia a Sendra Gimeno, V. (2010). *Derecho Procesal Civil II. Los Procesos Especiales* COLEX-Madrid. Pg163. Recuperado de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6488/1/T2790-MDP-Bahamonde-El%20procedimiento.pdf> el 11 de febrero de 2021.
- Bonilla G, H. (2017). *Sugerencias para la primera reforma al código general del proceso*, en referencia a la Dra. María del Socorro Rueda, doctrinante, conferencista, abogada y docente de la Universidad de los Andes en su artículo *La expedición de un Código general del proceso como mecanismo de descongestión: conveniencias y dificultades. ¿Responde la propuesta de código único a las exigencias de eficiencia de la justicia?* Bogotá, D.C, Universidad Santo Tomas. VIeI / Vol. 13, N.º 1. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033182005.pdf>

- <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6551396>y<https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/view/4272/4049> el 02 de noviembre de 2020.
- Cabanellas de Torres, G. (1994). *Diccionario enciclopédico de derecho usual*. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: <http://www.iterra.edu.mx/centro/wp-content/uploads/2019/02/88047784-Diccionario-Juridico-Elemental-Guillermo-Cabanellas-de-Torres-1.pdf>
- Cabezudo Rodríguez, N. (2009). *Aproximación a la teoría general sobre el principio de inmediación procesal de la comprensión de su trascendencia a la expansión del concepto*. Universidad de Valladolid. Recuperado de: <http://www.uv.es/coloquio/coloquio/comunicaciones/cp4cab.pdf> el 17 de noviembre de 2020.
- Carnelutti, F. (1944). *Sistema de Derecho Procesal Civil*, Argentina. T. L, Uthea. Pg 89.
- Carretero Pérez, A. (1971). *El Principio de Economía Procesal en lo Contencioso Administrativo*. Revista de Administración Pública No. 65, (1971) recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2111224> el 29 de septiembre de 2020.
- Casallas, L (2010). *Justicia Digital*. Revista digital de derecho administrativo N°4, SEGUNDO SEMESTRE/2010. Universidad Externado De Colombia. Pg. 47. Recuperado a partir de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/2767/2451> el 13 de octubre de 2020.
- Devís Echandía, H. (2002). *Teoría general de la prueba judicial*. t.I. 5ª ed. Bogotá: Temis.
- Díaz Restrepo, J.C. (2016). *La carga dinámica de la prueba como modalidad de carga probatoria aplicada en el ordenamiento jurídico Colombiano. Vulneración a la igualdad constitucional*. Candidato a Doctor en Delitos contra la Administración Pública-Delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, Universidad de Alcalá de Henares. Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Pg. 01. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v12n1/v12n1a14.pdf> el 12 de octubre de 2020.
- Flórez, G.D. (2014). *La validez jurídica de los documentos electrónicos en Colombia a partir de su evolución legislativa y jurisprudencial*. Bogotá: Universidad Libre de Colombia.
- Giraldo Montoya, C. (2015). *Derecho Probatorio*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Guerrero, I. K. (2016). *El Principio de Celeridad en relación con la Ejecución de Sentencias*. (Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Abogado de los Tribunales de Justicia de la República). Azuay: Universidad del Azuay.
- Gutiérrez, J. (2009). *El Principio de Celeridad Procesal y su eficaz aplicación para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva*. Tesis de especialización en Derecho Procesal. Facultad de Derecho, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.

- Horta Vásquez E. de J., Cabrales E. A. C. (2010). La razón última de la prueba judicial: una aproximación filosófica. *Novum Jus*, 4(1), 151-165. Recuperado a partir de <https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/704> el 20 de septiembre de 2020.
- Mantilla Espinosa, Fabricio, & Ternera Barrios, Francisco (2005). La resolución de los contratos en el derecho Colombiano. *Revista Chilena de Derecho Privado*, (5), 43-71. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3708/370838862002> el 16 de febrero de 2021.
- Meneses Pacheco, C. (2008). *Fuentes de prueba y medios de prueba en el proceso civil*. Ius et Praxis, 14(2). Recuperado de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v14n2/art03.pdf> el 11 de febrero de 2021.
- Puppio, J. V. (2008) *Teoría general del proceso*. Ediciones Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Venezuela.
- Quijano Parra, J. (2007). *Manual de Derecho Probatorio*. Ediciones Librería El Profesional - Bogotá.
- Quijano Parra, J. (2015). *Algunos apuntes de la prueba indiciaria*” Revista u, externado de Colombia.
- Quiroz Monsalvo, A.W. (2020). *Justicia Digital: bases para planear por escenarios a partir del código general del proceso*. Corte suprema de justicia.
- Rico Puerta, L A. (2008). *Teoría general del proceso*. Segunda Edición. LEYER.
- Romero Infante J. (2017). *La prueba judicial: una aproximación realista*. *Novum Jus*, 11(2), 53-80. Recuperado de <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2017.11.2.3> el 18 de febrero de 2021.
- Serrano Gómez, R., & Acevedo Prada, M. (2017). *Aportes jurisprudenciales y doctrinales sobre la prescripción adquisitiva del dominio y el justo título en el derecho colombiano*. Entramado, 8(1), 100-125. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v8n1/v8n1a08.pdf> el 16 de febrero de 2021.
- Sánchez Z, M. (2011) *La metodología en la investigación jurídica: características peculiares y pautas generales para investigar en el derecho*. Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 14, 2011, pp. 317-358. Recuperado de <http://www.rtfed.es/numero14/11-14.pdf> el 23 de marzo de 2021.
- Villareal Hernández, G. (2018). *Los fines del proceso civil desde la perspectiva del garantismo*.t.I.1ª ed. Bogotá: Sánchez R Ltda.



## NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia de 1886, sobre el *preámbulo*. Recuperado de [https://www.redjurista.com/Documents/constitucion\\_politica\\_de\\_1886.aspx#/](https://www.redjurista.com/Documents/constitucion_politica_de_1886.aspx#/) el 23 de marzo de 2021.

DECRETO 806 de 2020, Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Del 04 de junio de 2020.

DECRETO Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 Sobre El Código Sustantivo del Trabajo, publicado en el Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del Estado de Sitio promulgado por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949.

LEY 84 DE 1873, Por medio de la cual se expide el Código Civil Colombiano. Diario Oficial No. 2.867 de 31 de mayo de 1873.

LEY 1395 de 2010, Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de DESCONGESTIÓN JUDICIAL con relación a la reforma al código de procedimiento civil respecto al juramento estimatorio y demás disposiciones. Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

LEY 1437 de 2011, Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y regula el tema de las NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA. Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011

LEY 1564 DE 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012.

NACIONES UNIDAS, Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico Guía para su incorporación al derecho interno con la Guía para su incorporación en el Derecho Interno 1996 con el nuevo artículo 5 bis aprobado en 1998. (New York: Naciones Unidas, 1999)

## JURISPRUDENCIA

Corte Constitucional, (24 de febrero de 2016) sentencia C-086 de 2016 sobre *CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA conforme a la Facultad del juez para distribuir la carga de la prueba*. Actores: Alejandro José Peñarredonda Franco y Helena Carolina Peñarredonda Franco. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-086-16.htm> el 12 de febrero de 2021.

Corte Suprema De Justicia, (17 de marzo de 2009). Sala de Casación Penal. Sentencia Rad. 22053 sobre *LA UTILIDAD DE A PRUEBA*. Recuperado de <https://tribunalsuperiordecucuta.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/Resumen-Sentencia-CSJ-Rad.-51882.pdf> el 16 de febrero de 2021.

Corte Suprema de Justicia, (30 de septiembre de 2015) Sala de casación penal. Sentencia Rad.46153 de 2015 sobre CONCEPTO DE PERTINENCIA, UTILIDAD Y CONDUCTENCIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. En relación a la sentencia del 17 Mar 2009, Rad. 22053. Magistrado Ponente: Patricia Salazar Cuello. Recuperado de <https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/b2oct2015/AP5785-2015.pdf> el 16 de febrero de 2021.

Corte Suprema de Justicia, (20 de abril de 2018) Sala de Casación Civil. Sentencia SC1209-2018, Rad.11001-31-03-025-2004-00602-01 sobre EL PROCESO DECLARATIVO Y LA RESOLUCIÓN DE COMPRAVENTA. Magistrado Ponente: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Recuperado de <https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/10/SC1209-2018-2004-00602-01.pdf> el 11 de febrero de 2021.